



# Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Distr. general  
12 de junio de 2015

Original: español

## Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

### Observaciones finales sobre los informes periódicos 14.º y 15.º combinados de Guatemala\*

1. El Comité examinó los informes periódicos 14.º y 15.º de Guatemala, presentados en un único documento (CERD/C/GTM/14-15), en sus sesiones 2329.<sup>a</sup> y 2330.<sup>a</sup> (CERD/C/SR.2329 y 2330), celebradas los días 29 y 30 de abril de 2015. En su 2345.<sup>a</sup> sesión, celebrada el 11 de mayo de 2015, aprobó las siguientes observaciones finales.

#### A. Introducción

2. El Comité celebra que el Estado parte haya presentado a tiempo los informes periódicos 14.º y 15.º. Asimismo, expresa su reconocimiento al Estado parte por la presentación realizada por la amplia delegación de alto nivel, y valora las importantes respuestas dadas a las numerosas preguntas formuladas por los miembros del Comité.

#### B. Aspectos positivos

3. El Comité destaca el compromiso internacional de Guatemala con la promoción de instrumentos y políticas a favor de los derechos de los pueblos indígenas.

4. El Comité celebra la continua colaboración del Estado parte con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y saluda la firma del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015-2019.

5. El Comité destaca el establecimiento de medidas tendientes a promover y coordinar las políticas públicas en contra de la discriminación racial, acogiendo en particular las siguientes:

a) La Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial;

b) El Plan Nacional de Desarrollo “K’atun, Nuestra Guatemala 2032”.

6. El Comité celebra asimismo la adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

\* Aprobadas por el Comité en su 86.º período de sesiones (27 de abril a 15 de mayo de 2015).



7. El Comité destaca la labor del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, así como la activa participación y las aportaciones de la sociedad civil y de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

## **C. Motivos de preocupación y recomendaciones**

### **Datos estadísticos**

8. El Comité sigue preocupado por la falta de datos estadísticos recientes, fiables y completos sobre la composición de la población dentro del país. Le preocupa en particular la demora en la realización del censo poblacional previsto para 2012, así como la incertidumbre que eso genera, tomando en cuenta que la variación de las estimaciones de la población que se autoidentifica como indígena son del 40% a 60% de la población.

**El Comité recuerda al Estado parte la necesidad y la urgencia de contar con información desglosada que permita desarrollar políticas públicas y programas adecuados a las necesidades de los grupos vulnerables de la sociedad. El Comité reitera su recomendación (CERD/C/GTM/CO/12-13, párr. 6) sobre la metodología censal y alienta al Estado a seguir cooperando con las agencias de cooperación internacional para priorizar un enfoque de género y de tomar plenamente en cuenta el principio de autoidentificación en la realización del censo, incluyendo en el formulario todas las características étnicas de la población, incluso las que son resultado de una mezcla de culturas. Se recomienda contar con datos estadísticos sobre la población afrodescendiente para la toma de decisiones adecuadas en el marco del decenio internacional de los afrodescendientes.**

### **Marco legal**

9. El Comité nota con preocupación brechas en la implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas —uno de los 12 Acuerdos de Paz— y destaca al respecto la importancia de reformas estructurales. El Comité toma nota del compromiso de Guatemala para llevar a cabo las necesarias reformas constitucionales y asimismo reconocer formalmente los pueblos indígenas, sus lenguas, espiritualidad, justicia, y otros contenidos de dicho Acuerdo de Paz. Asimismo, el Comité sigue preocupado por la falta de avances en la discusión y aprobación por el Congreso de varias iniciativas tales como sobre la consulta a los pueblos indígenas (iniciativa 4051), la jurisdicción indígena (iniciativa 3946), el desarrollo rural integral (iniciativa 4084), los lugares sagrados (iniciativa 3835), la educación bilingüe, multicultural e intercultural (iniciativa 3913), los medios de comunicación comunitarios (iniciativa 4087), el programa nacional de resarcimiento (iniciativa 3551), la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (iniciativa 4783), o la reforma de Ley de Minería (iniciativa 4945). Preocupa al Comité que la aprobación de varias de estas iniciativas siga pendiente en el Congreso desde hace más de una década.

**El Comité recomienda dar prioridad en la agenda legislativa a las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos. El Comité recomienda también tomar las medidas estructurales adecuadas para implementar plenamente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, incluso con las necesarias reformas constitucionales, considerando la posibilidad de establecer mesas de trabajo al respecto con los pueblos indígenas.**

## **Impunidad**

10. El Comité saluda los esfuerzos que se llevaron a cabo para luchar contra la impunidad, incluyendo la apertura a juicio de casos paradigmáticos como el de Sepur Zarco. El Comité saluda también la tendencia jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad sobre la inadmisibilidad de disposiciones de amnistía y de prescripción de la acción penal para graves violaciones de derechos humanos, y reconociendo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de observancia obligatoria. El Comité destaca la importancia de estos juicios en el proceso de reparación y rehabilitación de las víctimas. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por los numerosos desafíos que persisten, tal como lo demuestra la anulación de la sentencia en contra de Efraín Ríos Montt. Preocupa al Comité que instituciones del Estado emiten pronunciamientos sobre la cualificación jurídica de los hechos sin esperar las decisiones de los órganos judiciales, tal como el Punto Resolutivo 3-2014 del Congreso de la República. (art. 6).

**El Comité recomienda al Estado redoblar sus esfuerzos para investigar y llevar ante los tribunales las graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, donde muchas de las víctimas fueron indígenas. Se recomienda en particular fortalecer la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Se recomienda asimismo seguir tomando todas las medidas necesarias para fortalecer la independencia del organismo judicial.**

## **Consulta previa, libre e informada**

11. Preocupa al comité la alta conflictividad que surge de la concesión de licencias o autorizaciones para proyectos hidroeléctricos, de explotación de recursos naturales, o de monocultivo, en las tierras y territorios que pertenecen a los pueblos indígenas o que han sido tradicionalmente ocupadas por ellos.

12. El Comité observa con preocupación que tales concesiones han sido otorgadas sin que se respete el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. El Comité nota que, en virtud del artículo 46 de la Constitución el cual concede preeminencia sobre el derecho interno al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, dicho derecho debe ser implementado a pesar de la ausencia de un marco legislativo interno. El Comité nota que la consulta es necesaria tanto cuando los recursos naturales pertenecen a los pueblos indígenas, como cuando se reserva la propiedad de los recursos del subsuelo al Estado, según el artículo 6 y el artículo 15, párrafo 2 del Convenio 169 de la OIT. El Comité nota con interés las sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad en los casos de San Juan Cotzal y de San Juan Sacatepéquez en las cuales se ordena la implementación de la consulta.

13. El Comité toma nota de la información proporcionada acerca de la propiedad comunal. Sin embargo, nota con preocupación que el marco jurídico sobre tierras, territorios y recursos naturales no ha sido adoptado a pesar del pronunciamiento del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas estimando que la protección legal vigente no alcanzaba los estándares internacionales. Preocupa por lo tanto al Comité el estado de desprotección en el cual se encuentran los pueblos indígenas ya que el Estado parte sigue permitiendo el despojo de las tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas sin consultarlos.

14. Asimismo, preocupa al Comité los hechos violentos que se desencadenaron al margen de las protestas generadas por la concesión de tales proyectos, así como la respuesta del Estado declarando estados de emergencia (art. 5, apdo. d, inc. v)).

**El Comité destaca las implicaciones que tienen la falta de implementación del derecho a la consulta y a la tierra, en esta conflictividad. Por lo tanto, a la luz de su**

**Recomendación general N.º 23 (1997), sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Comité:**

- a) **Reitera su recomendación (CERD/C/GTM/CO/12-13, párr. 11) sobre el derecho a la consulta, y exhorta a desarrollar mecanismos prácticos para asegurar la consulta de los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas. El Comité nota que solamente en los casos excepcionales se puede considerar el traslado y el reasentamiento de los pueblos indígenas, y en estos casos se requiere el consentimiento de los pueblos en cuestión;**
- b) **Recomienda la adopción, en consulta con los pueblos indígenas, de un marco legal interno que regule el derecho a la consulta. El Comité recomienda también la revisión del marco legal existente, tal como la Ley de Minería, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y el Reglamento de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental;**
- c) **Recomienda reforzar las mesas de diálogo, para asegurar el cumplimiento de los acuerdos firmados, y recomienda una moratoria temporal para el otorgamiento de nuevas licencias para tales proyectos mientras no existan mecanismos de consulta;**
- d) **Recomienda la pronta implementación de las decisiones de justicia tales como la decisión en el marco de los casos de San Juan Cotzal y de San Juan Sacatepéquez;**
- e) **Alienta al Estado parte a que reconozca los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras y territorios mediante la adopción de un marco jurídico adecuado, en consulta de los pueblos indígenas;**
- f) **Recomienda garantizar plenamente el libre ejercicio de la protesta social, tomando las medidas necesarias para proteger a los manifestantes, e investigando los ataques en su contra. Se destaca en este marco la necesidad de implementar plenamente la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada (Decreto 52-2010).**

#### **Defensores de derechos humanos**

15. El Comité expresa su gran preocupación ante la persistencia de ataques y amenazas en contra de los defensores de derechos humanos y periodistas en general y los defensores y periodistas indígenas en particular. El Comité observa que en muchos casos, esos ataques y homicidios ocurrieron en el marco de conflictos vinculados a la explotación de recursos naturales. Preocupa al Comité que, a menudo, estas protestas derivan en procesos penales en contra de los activistas en los que se emplean figuras penales tales como terrorismo, secuestro, instigación a delinquir y asociación ilícita, que resultan desproporcionadas a la gravedad de los hechos (art. 5, apdo. b).

**El Comité reitera su recomendación (CERD/C/GTM/CO/12-13, párr. 9) para que se investigue y sancione a los responsables de los ataques contra defensores de derechos humanos, en particular los defensores de derechos humanos indígenas. El Comité recomienda también la adopción y plena implementación, en consulta con la sociedad civil y con los pueblos indígenas, de un mecanismo efectivo de protección de los defensores de derechos humanos y de los periodistas, tomando en cuenta el alto peligro en el cual se encuentran líderes indígenas defendiendo su derecho a la consulta y a la tierra y sus recursos naturales.**

### **Participación política**

16. El Comité nota con preocupación la escasa representación de personas indígenas y afrodescendientes en cargos altos dentro del ejecutivo, y del órgano judicial en proporción a la población. Nota también con preocupación que de los 158 diputados, solamente 23 son indígenas. A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado, preocupa al Comité las dificultades y los obstáculos para la participación política plena de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, y en particular cuando se encuentren en zonas rurales. El Comité saluda el dictamen emitido por la Corte de Constitucionalidad, en el marco del proyecto de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, respecto a adopción de medidas especiales para asegurar por lo menos una representación de 30% de mujeres y de indígenas. (art. 5, apdo. c).

**El Comité reitera su recomendación (CERD/C/GTM/CO/12-13, párr. 10) sobre la participación de los pueblos indígenas, tomando en cuenta su Recomendación general N.º 23 (1997). El Comité recomienda incrementar la participación de los pueblos indígenas en los Consejos Comunitarios de Desarrollo. El Comité recomienda también reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para mejorar la representación de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes, y para facilitar su participación en zonas rurales. Se recomienda tomar de manera urgente medidas para que todos los ciudadanos cuenten con documentación personal. Se recomienda asimismo la adopción de medidas especiales o de acción afirmativa para asegurar una representación adecuada de indígenas y afrodescendientes en cargos altos, tomando en cuenta sus Recomendaciones generales N.º 32 (2009) sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la Convención, y N.º 34 (2011) sobre la discriminación racial contra afrodescendientes.**

### **Acceso a la justicia y pluralismo jurídico**

17. El Comité destaca la progresiva incorporación de estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas dentro de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. El Comité nota avances con relación al acceso a la justicia, y en particular la creación del Centro de Interpretación Técnica Jurídica Indígena, de 15 defensorías indígenas, y del Departamento de Pueblos Indígenas en el Ministerio Público. Sin embargo, preocupa al Comité que persisten desafíos para asegurar el pleno acceso de los pueblos indígenas a la justicia, tales como la autoidentificación étnica en los expedientes, el acceso a la justicia con pertinencia cultural, y la formación técnica de intérpretes.

18. El Comité destaca la Circular de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la observancia del sistema jurídico indígena en coordinación con el sistema jurídico oficial, y la información oral proporcionada durante el diálogo sobre el proceso de elaboración de un protocolo de justicia multicultural, y sobre la amplia competencia material reconocida a la justicia indígena. Si bien se destacan dos fallos de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia absolviendo a autoridades k'iche' de Totonicapán detenidas tras impartir justicia, preocupa al Comité las acciones judiciales contra autoridades indígenas por el ejercicio de su sistema jurídico, así como un fallo de la Cámara de Amparos de la misma Corte negando la existencia de la jurisdicción indígena. Por lo tanto, preocupa al Comité la falta de marco legal claro para el reconocimiento y aplicación del pluralismo jurídico (art. 5, apdo. a).

**El Comité reitera su recomendación (CERD/C/GTM/12-13, párr. 8) sobre el acceso a la justicia y pluralismo jurídico a la luz de su Recomendación general N.º 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal. El Comité recomienda también la adopción de políticas institucionales sobre el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, y una**

**actualización de los programas de las unidades de formación del organismo judicial. Se recomienda también el desarrollo de un marco legal específico para la coordinación de la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria. El Comité recomienda seguir fortaleciendo la Unidad Indígena en el Órgano Judicial y el Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio Público, incluso a nivel de recursos financieros y humanos.**

#### **Tipificación de la discriminación racial**

19. El Comité reitera su preocupación ante la falta de legislación interna que tipifique como acto punible toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia con motivación racial (art. 4, apdo. a). El Comité nota también con preocupación el número limitado de decisiones de justicia tomadas en materia de discriminación racial. Le preocupa asimismo que las penas previstas para la discriminación racial en el artículo 202 *bis* del Código Penal puedan ser conmutadas en multas bajas (art. 4, apdo. a, y art. 6).

**El Comité, a la luz de su Recomendación general N.º 35 (2013) sobre el discurso de odio racista, reitera su recomendación (CERD/C/GTM/CO/12-13, párr. 7) de dar pleno efecto a lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención, asegurándose que el delito de incitación a la discriminación racial y todo acto de violencia con motivación racial sean castigados con penas adecuadas para reflejar su gravedad. El Comité reitera también su recomendación (ibíd., párr. 16) con relación a la escasez de sentencias pronunciadas por discriminación racial.**

#### **Discriminación estructural**

20. El Comité nota con preocupación que las condiciones de pobreza y exclusión social afectan de manera particularmente intensa a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Según datos presentados al Comité, la pobreza extrema afectaría a 47% de la población indígena mientras que 87% de los indígenas estarían en situación de pobreza bajo un criterio multidimensional. Asimismo, la población de los municipios de mayoría indígena estarían particularmente afectados por las altas tasas de desnutrición crónica. El Comité observa también con preocupación el incremento de la superficie agrícola dedicada a monocultivos y cultivos comerciales, lo que reduce drásticamente la superficie agrícola dedicada al cultivo de alimentos básicos. Si bien se nota iniciativas del Estado al respecto tales como el Pacto Hambre Cero, le preocupa al Comité que tales iniciativas no sean dirigidas hacia las causas estructurales del problema. (art. 5, apdo. e).

**El Comité exhorta al Estado parte a incorporar los principios de derechos humanos en las políticas de inclusión social existentes, a asegurar la participación de los pueblos indígenas en estas políticas, y a dotarlas de recursos financieros y humanos adecuados. Se recomienda la adopción de medidas estructurales para la implementación plena de la política agraria. El Comité recomienda también la adopción de medidas especiales o de acción afirmativa para romper el vínculo entre pobreza y racismo, tomando en cuenta su Recomendación general N.º 32 (2009).**

#### **Salud intercultural**

21. El Comité observa los esfuerzos del Estado parte en materia de salud con la creación de la Unidad de atención de la Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad, pero nota con preocupación que el acceso a la salud sigue siendo restringido en las zonas de mayor población indígena, y que Guatemala continúa careciendo de un sistema universal de salud con pertenencia cultural (art. 5, apdo. e).

**El Comité reitera su recomendación (CERD/C/GTM/12-13, párr. 13) sobre la elaboración de una estrategia de salud intercultural, con la participación activa de**

pueblos indígenas. El Comité recomienda también redoblar los esfuerzos para facilitar el acceso a servicios de salud adecuados y culturalmente pertinentes en áreas rurales, incluso con la dotación de un presupuesto adecuado. Se recomienda asimismo dotar de medidas para recoger información desglosada por pueblo y comunidad. Se recomienda la adopción de la política de comadronas, en consulta con los pueblos indígenas y respetando sus formas propias de atención a la salud.

### **Educación bilingüe**

22. El Comité destaca los esfuerzos realizados por el Estado parte en materia de educación bilingüe. Sin embargo, le preocupa que, en muchos lugares, la educación bilingüe no esté disponible después del nivel preprimaria. El Comité lamenta que solamente el 26% de los estudiantes a nivel de educación básica y el 17% a nivel del ciclo diversificado sean indígenas. Preocupa también la persistencia de discriminación en las escuelas. Preocupa además al Comité la tasa alta de analfabetismo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, notando que alcanza un 97% en el pueblo garífuna (art. 5, apdo. e, inc. v)).

**El Comité reitera su recomendación (CERD/C/GTM/12-13, párr. 15) con relación a la lucha contra la discriminación y la necesidad de extender el alcance de la educación bilingüe. En este marco, el Comité recomienda fortalecer la especialización bilingüe de la carrera de magisterio.**

### **Derechos laborales**

23. Preocupa al Comité que el 81% de la población indígena económicamente activa trabaje en el sector informal sin tener acceso a los derechos laborales básicos como el salario mínimo o la seguridad social. Preocupan particularmente al Comité prácticas de trabajo forzoso, tales como condicionar el pago del salario a metas excesivas de trabajo, lo cual obliga a la familia del empleado a trabajar para cumplir las metas. Además, el Comité expresa su preocupación sobre los salarios mínimos establecidos en el Estado parte, que son insuficientes para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y a sus familias (art. 5, apdo. e, inc. i)).

**El Comité recomienda al Estado parte que siga haciendo todo lo posible por reducir el sector informal de la economía y por garantizar condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias conforme a estándares internacionales de derechos humanos. El Comité recomienda también reforzar la Inspección General de Trabajo, dotándole de los recursos presupuestarios y humanos necesarios, y de las herramientas necesarias para sancionar el incumplimiento de las normas laborales.**

### **Medios de comunicación**

24. El Comité nota con preocupación que aún siguen existiendo en los medios de comunicación manifestaciones de discriminación racial. Asimismo, el Comité destaca la importancia de los medios de comunicación comunitarios para los pueblos indígenas y nota con preocupación intervenciones del Estado para cerrar radios comunitarias y la ausencia de un marco jurídico al respecto (art. 7).

**El Comité reitera su recomendación (CERD/C/GTM/CO/12-13 párr. 17) para la adopción de medidas apropiadas para combatir los prejuicios raciales en los medios de comunicación. El Comité recomienda seguir trabajando, en consulta con los pueblos indígenas, para la adopción de un marco legal sobre medios de comunicación comunitarios, reservando frecuencias para radios comunitarias.**

**Fortalecimiento institucional**

25. El Comité observa el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado con relación a los derechos de los pueblos indígenas, que cuenta, entre otras instituciones, con el Gabinete de Pueblos Indígenas, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo y contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA), el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI). Sin embargo, preocupa al Comité que tales instituciones no cuenten con recursos adecuados. A pesar de los esfuerzos del Estado parte, preocupa también al Comité que aún no se logre una participación plena de los pueblos indígenas en el marco de las políticas desarrolladas por estas instituciones (art. 2).

**El Comité recomienda seguir reforzando las instituciones en materia de lucha contra la discriminación racial y de promoción de los derechos de los pueblos indígenas, dotándoles de los recursos humanos y presupuestarios necesarios. Se recomienda también un proceso de evaluación del panorama institucional para determinar si tales instituciones han cumplido con su objetivo y como podrían ser mejoradas, con la participación de los pueblos indígenas.**

**Discriminación múltiple**

26. Al Comité le preocupa que las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas continúen enfrentándose a múltiples formas de discriminación en todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural. El Comité nota también con preocupación la persistencia de la violencia contra las mujeres indígenas, y sus dificultades para acceder a la justicia (art. 2, párr. 2).

**El Comité recomienda que el Estado parte tome en cuenta su Recomendación general N° 25 (2000) sobre las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género e incluya una perspectiva de género en todas sus políticas y estrategias para hacer frente a las formas múltiples de discriminación que afectan en especial a las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas. El Comité recomienda adoptar medidas para romper con el círculo de la violencia, y transformar las circunstancias y patrones que las hacen vulnerables al fenómeno de la violencia, así como tomar medidas para asegurar su protección y reparación.**

**D. Otras recomendaciones****Ratificación de otros tratados**

27. El Comité alienta al Estado parte a ratificar los tratados internacionales en los que aún no es parte, en especial la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

**Declaración prevista en el artículo 14**

28. El Comité alienta al Estado parte a que haga la declaración facultativa prevista en el artículo 14 de la Convención.

**Enmienda al artículo 8 de la Convención**

29. El Comité recomienda que el Estado parte ratifique la enmienda al párrafo 6 del artículo 8 de la Convención, aprobada el 15 de enero de 1992 en la 14.<sup>a</sup> Reunión de los Estados partes en la Convención y que hizo suya la Asamblea General en su resolución 47/111, de 16 de diciembre de 1992.



### **Declaración y Programa de Acción de Durban**

30. A la luz de su Recomendación general N.º 33 (2009) sobre el seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban, el Comité recomienda al Estado parte que, al incorporar la Convención en su legislación nacional, tenga en cuenta la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, así como el documento final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información concreta sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción en el ámbito nacional.

### **Decenio Internacional para los Afrodescendientes**

31. A la luz de la resolución 68/237 de la Asamblea General proclamando el Decenio Internacional para los Afrodescendientes para 2015-2024 y de la resolución 69/16 de la Asamblea sobre el programa de actividades del Decenio, el Comité recomienda que el Estado parte prepare y lleve a cabo un programa adecuado de medidas y políticas. El Comité pide asimismo al Estado parte que incluya en su próximo informe información precisa sobre las medidas concretas adoptadas en este marco, a la luz de su Recomendación general N.º 34 (2011) sobre la discriminación racial contra afrodescendientes.

### **Difusión de los informes y de las observaciones finales**

32. El Comité recomienda que el Estado parte ponga sus informes a disposición del público en general desde el momento mismo de su presentación y que de igual manera lo haga también para las observaciones finales del Comité, difundiéndolas en el idioma oficial y, si procede, en otras lenguas de uso común en el Estado parte.

### **Consultas con organizaciones de la sociedad civil**

33. El Comité recomienda al Estado parte que siga celebrando consultas y ampliando su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos humanos, en particular a la lucha contra la discriminación racial, en relación con la preparación del próximo informe periódico y el seguimiento de las presentes observaciones finales.

### **Seguimiento de las observaciones finales**

34. De conformidad con el artículo 9, párrafo 1 de la Convención y del artículo 65 de su reglamento enmendado, el Comité pide al Estado parte que, en el plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, le presente información sobre el curso dado a las recomendaciones que figuran en los párrafos 8, 9 y 13.

### **Párrafos de particular importancia**

35. El Comité desea asimismo señalar al Estado parte la particular importancia de las recomendaciones que figuran en los párrafos 10, 11 y 14 y pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre las medidas concretas que adopte para aplicarlas.

### **Preparación del próximo informe**

36. El Comité recomienda al Estado parte que presente sus informes periódicos 16.º y 17.º en un solo documento combinado a más tardar el 20 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta las directrices relativas al documento específicamente destinado al Comité,

aprobadas por éste en su 71.º período de sesiones (CERD/C/2007/1), y que en dicho documento se aborden todas las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales. A la luz de la resolución 68/268 de la Asamblea General, el Comité insta al Estado parte a respetar el límite de 21.200 palabras para los informes periódicos y de 42.400 para el documento básico común.

---